

La ley de la motosierra

8

“Estoy dispuesta a acostarme con alguno de los capos con tal de lograr información que a ustedes les sirva”, susurró la fascinante mujer que le habían presentado como posible recurso para capturar a los capos del cartel de Cali. El coronel Carlos Alfonso Velásquez no sospechaba que era precisamente a él a quien María de la Vega deseaba llevarse a la cama. Tras la muerte de Pablo Escobar, la Casa Blanca había impuesto al gobierno de Bogotá la lucha contra los nuevos señores del narcotráfico mundial, quienes a su vez confiaban haber ganado el reconocimiento del Estado suramericano por el papel desempeñado en la caza a don Pablo.

Al mando del enésimo Bloque de Búsqueda colombiano había sido designado precisamente Velásquez. Después de unos meses persiguiendo a los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios, el coronel capituló ante la ardiente rubia. Solamente se dio cuenta de la trampa en que había caído cuando, unos días después de la primera noche de amor en un motel de la periferia de Cali, descubrió el contenido de un videocasete, dejado misteriosamente sobre el escritorio. Viéndose desnudo en los brazos de la hermosa María, sintió que se le venía el mundo encima. Aunque consciente del escándalo que iba a estallar, Velásquez decidió no aceptar el chantaje mafioso y confesó todo a sus superiores. El ministro de Defensa y el comandante del ejército le renovaron su confianza, y obtuvo además el perdón de su mujer, que fue definida por la prensa rosa como “la Hillary Clinton colombiana”.¹

1. “La historia del coronel Velásquez”, *Semana*, 16 de agosto de 1994; *El Espectador*,

A pesar de que había cedido a las primeras de cambio a las lisonjas de la sensual caleña, Velásquez había demostrado ser, en cualquier caso, un hombre honesto. E intentó serlo también cuando fue asignado a la XVII brigada establecida en la violenta región de Urabá, como ayudante del general Rito Alejo del Río. Velásquez, que había recibido hasta entonces una docena de reconocimientos y medallas por su actividad contraguerillera, se dio cuenta de que en la zona bananera militares y paramilitares actuaban como un solo cuerpo. En vez de tomar parte en el baño de sangre en curso, el coronel denunció a los superiores que el general Del Río coordinaba las operaciones de sus soldados con los paras. Esta vez, sin embargo, los encontró mucho menos comprensivos. El Estado Mayor del ejército le descubrió “problemas mentales” y forzó su dimisión por “oficial peligroso, desleal con la institución”, acusándolo de haber cultivado una “gran amistad con personas e instituciones que se han declarado abiertamente enemigas del ejército”, o sea, sindicalistas, activistas de los derechos humanos y sobrevivientes de la Unión Patriótica. También fue acusado el coronel de mantener relaciones con la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, señalada por Del Río como colaboradora de los rebeldes. La Cuartas había caído en desgracia ante el ejército desde que había revelado que los paras habían decapitado a un muchachito de 12 años delante de sus compañeros de escuela, y no los guerrilleros de las FARC, como había denunciado la prensa nacional e internacional.

A pesar de que posteriormente, en abril de 2001, el general Del Río fue arrestado bajo la acusación de haber pagado a testigos falsos para calumniar a las organizaciones de los derechos humanos y de haber formado grupos de paramilitares, en los aparatos del Estado prevaleció una vez más la “línea dura” en su enfrentamiento con el coronel Velásquez. Era el primer oficial de alta graduación que osaba denunciar la convivencia con los paramilitares, y se le obligó a presentar su dimisión del ejército.

Cuando en 1994 fue elegido presidente Ernesto Samper, considerado un liberal progresista, muchos imaginaron ilusionados que Colombia había enfilado la senda de la democracia. En su discurso de investidura, Samper declaró solemnemente que “ningún Estado puede exigir respeto a sus ciudadanos si sus propios agentes obran de manera arbitraria atropellando los derechos de los individuos”. A pesar del comienzo prometedor, no faltaron los escépticos. En una carta pública dirigida a Samper, Jaime Córdoba Triviño, defensor del pueblo, figura institucional creada por la nueva constitución, escribió: “Hay un dramático y notable contraste en-

11 de agosto de 1994, y *Cambio* 16, 13 de enero de 1997.

tre la consagración nominal de los derechos fundamentales e inalienables de todo ser humano –generosamente enunciados y reconocidos (por la Constitución)– y la crítica situación padecida por ellos en la práctica”.²

Dos días después de la toma de posesión de Samper, tres sicarios mataron a Manuel Cepeda, el único senador de la UP, en un barrio del sur de Bogotá después de haber detenido el automóvil en el que viajaba con su escolta. Desde hacía varios meses Cepeda estaba denunciando un plan de exterminio institucional de la izquierda legal, llamado “Golpe de gracia”. Inmediatamente después de su homicidio, y antes de ser acusado, el ejército negó su participación hasta el punto de hacer pensar que “hasta los militares sospechan de sí mismos”. El homicidio número 2444 de la Unión Patriótica fue atribuido por los periódicos a los paramilitares, si bien unos años más tarde fueron condenados como ejecutores de aquel crimen dos sargentos en activo. Después del asesinato de Cepeda, *Semana* escribió

Esta resurrección del paramilitarismo era previsible en cierto modo... Los latifundistas, los ganaderos, los campesinos, los policías y miembros del ejército viendo que el gobierno responde a la guerrilla con generosas ofertas, y advirtiendo poca claridad en la política pierde, como es normal, la confianza en las instituciones y deciden tomarse la justicia por sí mismos.³

Conmocionado por la muerte de Cepeda, Samper prometió tomarse en serio la guerra contra los paras. “Perseguiremos a los paramilitares hasta el infierno”. Su ministro del Interior, Horacio Serpa, se comprometió a poner en funcionamiento la Comisión Antisicarial olvidada sobre el papel desde 1989. “Militares *versus* Paramilitares: ¿la próxima batalla?”, titulaban los periódicos. Mientras los generales prometían combatir de la misma forma a “todos los violentos”, los soldados comprometidos en los batallones de contraguerrilla admitían, con mucha mayor sinceridad, que contra los paras “no les podíamos hacer nada porque nos ayudan a frenar a las FARC”. El mayor de un grupo establecido en la región del Putumayo declaró a un enviado del *Miami Herald*: “Si yo tengo un arma, ¿no piensas que voy a usarla contra la guerrilla que me está disparando antes que contra un tipo que está asimismo disparando contra la guerrilla?”. Fidel Castaño, en una carta abierta dirigida al gobierno y publicada por *El Tiempo* en noviembre de 1994, escribió: “No será sencillo mandar a las Fuerzas Armadas a que hagan la guerra contra las autodefensas antes que a nues-

2. *Su defensor*, septiembre de 1994.

3. *Semana*, 16 de agosto de 1994.

tro poderoso enemigo común". Las promesas de Ernesto Samper quedaron en papel mojado a pesar de haber sufrido personalmente los efectos de la guerra sucia. Cinco años antes, en el mes de marzo, había estado durante una semana entre la vida y la muerte por cruzarse en la trayectoria de los disparos que eliminaron, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, al joven dirigente comunista José Antequera. Samper tenía todavía en el cuerpo cuatro de las once balas que le habían alcanzado en aquella ocasión. Quienes habían apostado sobre su mano firme frente a los paramilitares, tuvieron que cambiar de idea.

Ernesto Samper fue, en todo caso, un presidente criticado en el Palacio Nariño hasta que se descubrió que su campaña electoral había sido financiada con seis millones de dólares del cartel de Cali. "Si ha entrado dinero de procedencia ilícita, ha sido a mis espaldas", se defendió Samper. Para no ser destituido y evitar la cárcel, como había sucedido a su ministro de Defensa Fernando Botero, Samper intentó congraciarse con el gobierno de Washington convirtiéndose en paladín de la más insensata "guerra a la droga". Con la promesa de arrancar en dos años los cultivos de coca, Samper decidió atacar las regiones cocaleras del sur, donde el Estado se hallaba representado casi exclusivamente por establecimientos militares, aislados o sin poder alejarse de sus guarniciones, y donde el verdadero poder estaba representado por las FARC, que administraban justicia, reclutaban jóvenes para su ejército y, sobre todo, regulaban todo tipo de comercio, comenzando por el de la droga. Cuando los aviones comenzaron a arrojar toneladas de veneno sobre los campos, se desencadenó una verdadera revuelta. En año de 1996, 300.000 campesinos ocuparon las mayores ciudades del sur del país, exigiendo al gobierno que cesara las fumigaciones aéreas o que pusiera en marcha una política seria de cultivos alternativos. Además, el glifosato se regaba indiscriminadamente, destruyendo también otros cultivos, contaminando los ríos y constituyendo una seria amenaza para la salud de los niños y del ganado. Las autoridades civiles y la Iglesia apoyaron la protesta. "Es una guerra estúpida. Es como tratar de matar una serpiente comenzando a golpearla por la cola y no por la cabeza", dijo el obispo de Florencia, en el departamento de Caquetá.

El Estado colombiano respondió a los campesinos con el esquema de siempre. Primero los ignoró. Después los acusó de ser manipulados por la narcoguerrilla. Y finalmente los reprimió. Hubo 18 muertos, cientos de heridos y varios desaparecidos entre los manifestantes. Después de negociaciones extenuantes, se llegó a la firma de un acuerdo que prometía enfáticamente "un desarrollo que liberara a los campesinos de la tenebrosa economía de la cocaína". Pero se trataba de simple literatura. Las escasas

partidas presupuestarias acabaron en los bolsillos de los políticos locales, liberales y conservadores. Disueltas las manifestaciones, se volvió a las fumigaciones y, sobre todo, se llevó a cabo la venganza más vil. Al año escaso de finalizar las protestas fueron asesinados o desaparecidos 23 de los 27 delegados campesinos.⁴ Su líder principal fue muerto el 7 de marzo de 1997 en la oficina central de la Unión Sindical Agraria, en pleno centro de Bogotá. El gobierno central continuó aplicando de ese modo la estrategia utilizada desde 1781 por la administración española contra el movimiento campesino e indígena anticolonial de los Comuneros. También entonces tenía lugar la persecución de los jefes de la revuelta una vez que se firmaban acuerdos, convertidos luego en papel mojado. El principal dirigente, José Antonio Galán, fue detenido, ahorcado y descuartizado delante de la muchedumbre que le seguía.

Samper no logró, en todo caso, librarse del fantasma de la droga, que pareció jugar a ridiculizarlo el 20 de septiembre de 1996, cuando se descubrieron cuatro kilos de cocaína en el avión presidencial que estaba a punto de despegar hacia Nueva York, donde estaba prevista una Asamblea General de las Naciones Unidas. Al apearse en Estados Unidos, Samper tuvo un golpe de ingenio: “He llegado con algún kilo de menos”. La evidente debilidad del gobierno legal reforzaba al gobierno ilegal, cuya punta de lanza era el paramilitarismo. Había muchos factores que contribuían a ello. El desmantelamiento del cartel de Medellín, con sus componentes repartidos por cárceles y cementerios, y el del cartel de Cali, conseguido de forma menos ruidosa, habían dejado sin trabajo a miles de jóvenes sicarios, dispuestos a enrolarse en el nuevo ejército de los paras. En los miserables barracones de Medellín algunos grupos formaron los Comandos Armados del Pueblo (CAP) y las Milicias Populares, ligados a la guerrilla, mientras que la mayor parte de las bandas pasaron a trabajar para los hermanos Castaño. La más famosa, la de La Terraza, que tomó el nombre de una conocida heladería de la comuna nororiental, ante la que habían realizado una matanza los policías, se hizo responsable de algunos de los homicidios más sonados de la última década.

La desaparición de los carteles originó una notable reestructuración del narcotráfico. Los mafiosos colombianos comprendieron que era arriesgado crear megaestructuras, con un imponente aparato militar, pues acababan llamando la atención de las autoridades. Los hermanos Castaño se presentaron como interlocutores capaces de satisfacer cualquier exigencia de seguridad, evitando confusiones de papeles e interferencias dañinas,

4. *El Tiempo*, 8 de marzo de 1987.

como había sucedido con el narcoparamilitarismo de los años ochenta. Solamente debería haber un ejército, el de ellos. El modelo a aplicar seguía siendo el de Puerto Boyacá, donde a la vuelta de unos años, el MAS había realizado una especie de pax romana, alejando a los grupos de guerrilleros, eliminando todo tipo de organización popular, arrancando la tierra a los pequeños campesinos y concentrándola en manos de los empresarios agrícolas ligados a la exportación. La llamada “modernización” del Magdalena Medio, ayudada por la ampliación de la electrificación y el mejoramiento de la red de carreteras, produjo miles de desempleados. A muchos de ellos se les propuso enrolarse en el ejército o en las milicias paramilitares. Los paras se demostraron verdaderos “capitalistas de la inseguridad”. Además de acaparar terrenos como “botín de guerra”, compraron otros a pocos miles de pesos por hectárea, para venderlos más tarde, un vez concluida la “pacificación”, a un precio mucho más alto.⁵

Los Castaño acometieron, también, actuaciones más arriesgadas. Después de haber participado en la caza de Escobar junto a los narcos de Cali, se distanciaron de ellos. Cuando José Santacruz, tercer hombre del cartel tras los hermanos Rodríguez Orejuela, se escapó de la supercárcel La Picota de Bogotá, Castaño ideó la forma de poner remedio a la enésima humillación del Estado. Apenas fue descubierto su cadáver frente a un lujoso hotel de Medellín, el jefe de la Policía, Rosso José Serrano, atribuyó la muerte a sus propios hombres, demostrando manejar “un operativo limpio, rápido y certero”. Tuvo que desdecirse precipitadamente ya que fueron descubiertas las huellas de salvajes torturas en el cuerpo del jefe, y el cuerpo descuartizado de su chofer (Castillo, 1996). Castaño prestaba servicios fúnebres sobre todo al ejército, aportando los hombres para las tramas estatales más oscuras e imprevisibles. El 5 de noviembre de 1995 fue muerto en Bogotá el líder conservador Álvaro Gómez. El delito fue inicialmente adjudicado a la guerrilla, pues Gómez había sido su despiadado enemigo desde los tiempos de la Operación Laso. Las investigaciones sucesivas develaron que los asesinos de Gómez habían sido militares de permiso, coordinados por Castaño.⁶ La misma formación asesina eliminaría tres años más tarde al general y ex ministro de Defensa, Fernando Landazábal, otro símbolo de la derecha militar.

Los paras, en todo caso, continuaron desarrollando prioritariamente su misión de eliminar a los civiles que Castaño llamaba “guerrille-

5. La definición de “capitalistas de la inseguridad” es tratada por Fernando Cubides (1999).

6. *El Tiempo*, 9 de junio de 2000.

ros desarmados". A mitad de los años noventa, su campo de acción se limitaba todavía a los territorios de Córdoba y de Urabá, donde habían tenido lugar más de la mitad de las matanzas del país. Los colombianos parecían haberse acostumbrado a ello. Cada tanto despertaban ampollas algunos testimonios de los noticieros sobre el matadero humano en que estaba convertida la región bananera. "Hace tres días no teníamos ningún entierro en este lugar y estábamos muy contentos de la tranquilidad", dijo un sacerdote de la diócesis de Apartadó, después de una de las matanzas más terribles de campesinos.⁷ La alcaldesa de la ciudad, Gloria Cuartas, contó que a menudo los matones no daban el golpe de gracia a sus víctimas para que murieran desangrándose lentamente. "Usted va por la calle, ve un herido y convoca a la población para que done sangre y la gente no lo hace. Le dicen: no done sangre que lo matan, no recoja al herido que lo matan".⁸ En las zonas rurales podía suceder que los sicarios impidieran a los familiares de las víctimas enterrar los cadáveres, dejándolos de pasto a los buitres. Muchos líderes políticos o sindicales fueron perseguidos y eliminados por sicarios incluso en las ciudades donde se habían refugiado. Cuando no conseguían matarlos, se resarcían con la mujer o sus hijos.

La típica acción guerrillera era la emboscada a la patrulla militar. A veces los rebeldes de las FARC organizaban retenes móviles que localizaban a los soldados que se hallaban de permiso, y los fusilaban allí mismo. Era raro, por el contrario, que se demostrase su implicación en masacres. Desde luego, era difícil entender a veces quiénes podían ser los responsables del baño de sangre. En agosto de 1995 los militares de la contraguerrilla se vistieron de paras antes de eliminar a 18 campesinos en una taberna de Chigorodó.⁹ La población aterrorizada puso en marcha un toque de queda que empezaba con la puesta del sol. Los alcaldes llegaron a prohibir en toda la región cualquier tipo de música después de las 10 de la noche. Exasperados, acabaron solicitando permiso para poder abrir un diálogo regional con los grupos armados. El gobierno Samper se opuso enfáticamente "para no llevar la anarquía a la zona". En las elecciones de 1997, la UP decidió no presentarse en Urabá, donde hacía años se había convertido en el partido mayoritario. Le faltaban garantías de seguridad y sobre todo candidatos dispuestos a dejarse matar. La Operación Retorno, lanzada por Gaviria seis años antes, podía darse por concluida.

7. *El Universal*, 20 de agosto de 1995.

8. *El Espectador*, 14 de agosto de 1995.

9. *El Espectador*, 17 de agosto de 1995.

Desde que el presidente Samper había declarado la costa pacífica colombiana como “tierra de progreso”, los paras comenzaron a realizar incursiones cada vez más frecuentes en el vecino Chocó, ignorado hasta entonces por el gobierno y hasta por los grupos armados. En un documento de la diócesis de Quibdó, de marzo de 1997, se leía: “La guerra que padece hoy el Chocó no es casual, diríamos en su lugar que es causal. Cuando se ven todos los intereses nacionales e internacionales que se ciernen y proyectan sobre el Chocó, se entiende cómo por esos mismos intereses se viene asesinando y desplazando a los pobladores; se entiende y comprende cómo cuando empiezan a concentrarse las miradas económicas sobre el Chocó se va incrementando el cordón paramilitar”. Eran sobre todo empresas multinacionales las que deseaban explotar una tierra única en el mundo por su biodiversidad, riquísima en materiales preciosos y, además, adecuada para realizar megaproyectos de infraestructura, como por ejemplo el canal interoceánico sobre el río Atrato, destinado a sustituir al ya obsoleto de Panamá. Los paras allanaban el camino a todo “plan de desarrollo”, haciendo pagar a sus habitantes, la mayoría indígenas y negros, la riqueza de su tierra.¹⁰

El objetivo de Castaño era transformar la región en un enorme prado, dado que, según decía, “detrás de cada árbol hay un guerrillero”. En su congreso de finales de 1994, realizado en una hacienda de Córdoba, los hombres de Castaño abandonaron el nombre de tangueros, que resultaba ya incómodo, para llamarse Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), presentándose todavía como “campesinos forzados a armarse para defenderse de los abusos de la guerrilla”. Organizados en grupos de combate, espionaje y apoyo político, decidieron pasar a la ofensiva en zonas cada vez más amplias del territorio nacional. En todas partes actuaban en coordinación con los batallones del ejército. Éstos operaban unas veces como retaguardia, preparados para entrar en acción en caso de producirse ataques guerrilleros, y otras les precedían, amenazando a la gente con la llegada de los “mochacabezas”.

En una entrevista a *El Colombiano*, Castaño afirmó que hay “civiles colaboradores por obligación, a quienes cuando se puede se les exige no colaborar más, colaboradores voluntarios a los cuales se les da quince días para abandonar la región y de no acatar la orden se los considera objetivo militar, y por fin guerrilleros camuflados considerados objetivo militar”.¹¹

10. *Alternativa*, julio de 1997.

11. *Cinep, Cien días*, enero, 1997.

Las ACCU comenzaron a mandar cartas amenazantes a las sedes políticas y sindicales. Se trató de intimidar al sindicato de maestros en Urabá escribiéndoles:

Tenemos los datos de sus familias, lugares de residencia, parientes cercanos, rutas, sitios y lugares donde se encierran a montar cachos a los cabrones. Somos el bloque de búsqueda y exterminio de la cuadrilla de subversivos agitadores embaucadores y sabuesos que se anida en el sindicato de profesores. Pensaron que todo el tiempo iban a estar sin control, pero vaya ese error. No intenten esconderse o dar a conocer esto a la prensa o al comité de maestros amenazados, ya que de nada les servirá. Donde se metan serán sacados como ratas. Ya conocen nuestros métodos y no nos importa explotar o incendiar una casa para sacarlos de ella. Desde ahora no pueden hacer paros, marchas, asambleas, sacar comunicados, platicar y hablar por la radio.

El avance paramilitar se llevaba a efecto según un esquema ya consagrado. Durante la primera fase intervenía masivamente el ejército y, si era necesario, la aviación, que bombardeaba los pueblos con el objetivo de alejar eventuales grupos de guerrilleros y preparar el terreno para la segunda fase, “de limpieza”, realizada por los paras, con incursiones imprevistas en las comunidades. “Las masacres de sospechosos, por ejemplo, son una notificación eficaz a la población para que corte sus lazos de apoyo a la guerrilla... y la región queda recuperada y después puede devolvérsela al Estado”, explicaban los jefes paras. Las acciones más cruentas y aparentemente inexplicables, como decapitaciones, descuartizamientos con motosierras, castraciones, violencias carnales y muertes de mujeres embarazadas, no eran objetivos en sí mismos, sino medios eficaces para conseguir, según los casos, el terror, la obediencia absoluta o el despoblamiento de las tierras destinadas a planes de desarrollo.

Era, por tanto, la economía más que la política la que guiaba las actuaciones de los paras. Según una investigación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la guerrilla se encontraba presente solamente en el 30% de los municipios sujetos a las incursiones paramilitares. “Esto origina sospechas sobre sus verdaderos objetivos”.¹² En la costa atlántica, el terror servía para la creación de una sociedad colonial, bajo unos pocos caciques, servidos y reverenciados por todos, defendidos por sus ejércitos privados y por los funcionarios estatales a su servicio. La redistribución

12. *El Colombiano*, 27 de julio de 1998.

de las tierras, la mayoría de ellas arrancadas a las víctimas eliminadas o puestas en fuga, la financiación de pequeñas empresas y la promoción de actos culturales o deportivos servían para crear el necesario consenso social. “Ahora sí que vivimos en paz”, se leía sobre las paredes de las zonas costeras del Golfo de Urabá, la primera región conquistada por los paras. En Arboletes, por ejemplo, se llevó a cabo una concentración excepcional de la propiedad: 69.000 de sus 72.000 hectáreas pasaron a manos de sólo cinco personas, ligadas al narcotráfico o al capital extranjero. Por el contrario, en las ciudades fue decisivo de cara al éxito del nuevo orden de los paras, la contribución aportada por los dirigentes del EPL, que fueron elegidos alcaldes de la mayor parte de las poblaciones como Turbo y Apartadó, o hasta crearon sindicatos patronales, sobre todo en las bananeras.

Las fases de la expansión de los paramilitares fueron enunciadas eficazmente en octubre de 2002 por la Corporación Regional para los Derechos Humanos (Credhos, 2002), que trabaja en el Magdalena Medio.

La estrategia paramilitar es un medio funcional a los fines políticos y económicos del Estado y de sectores importantes de la clase dominante. No es casual que las regiones de Urabá y el Magdalena Medio hayan sido seleccionadas por el Estado como zonas de planeación y desarrollo estratégico desde hace 30 años [...]

1. Fase de aniquilamiento y destrucción del tejido social democrático de la población civil. Esta fase muestra al terrorismo como esencia del régimen autoritario y de la política de gobernabilidad en el ejercicio del poder; su aplicación es una constante durante la implantación, desarrollo y consolidación del modelo. En este periodo se ejecutan los actos bárbaros y atroces contra la vida, la dignidad humana y la organización social; tiene como finalidad dispersar y aniquilar la base social y liderazgo alternativo, y neutralizar y desarticular el tejido social democrático. En este periodo se incrementan las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y de los mínimos humanitarios. En esta fase el paramilitarismo sienta las bases para ejercer el control y neutralización de la población y de las organizaciones civiles.
2. Fase de control social. A partir de esta etapa los grupos paramilitares actúan como una organización complementaria o sustitutiva de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, controlan organizaciones de seguridad privada, desarrollan patrullajes y cuentan con lugares fijos de operación. Restringen las libertades, dan el visto bueno de candidaturas, e imponen a la comunidad por quién votar; obligan a la población civil

a movilizarse para generar hechos políticos que reafirmen su consolidación para posibilitar el paso a la tercera fase de la reorganización social. Consolidan economías ilegales y establecen tarifas impositivas.

3. Fase de reorganización social. En este estado del proceso hacen aparición múltiples organizaciones políticas, económicas, de seguridad, sociales, culturales, sustitutas de las organizaciones desarticuladas en la primera fase, hijas afirmantes y voceras de la nueva realidad imperante; aparecen como las nuevas orientadoras, comunicándole a la población civil cómo deben ser las cosas. Este tipo de organizaciones está lejos de emprender luchas reivindicativas en lo social y económico.
4. Fase de legalización y legitimación. El paramilitarismo sufre una transformación significativa, y transita aceleradamente hacia la paraestatización de los poderes públicos del Estado y al condicionamiento de funcionarios públicos, hasta el punto de debilitar al Estado social y constitucional de derecho, que dicen defender, estableciendo una gobernabilidad y control totalitarios y de facto, situación que es facilitada por una impunidad casi absoluta. Establecen la connivencia territorial y la tolerancia con la Fuerza Pública, y comparten con ella el ejercicio de la autoridad. La organización de eventos culturales es el medio utilizado para llegar a la gente y así articular su base social y legitimar el proyecto totalitario; se hacen esfuerzos para mostrar una imagen positiva y próspera de la región, llegando algunos servidores públicos locales, incluso, a afirmar que “ya se consiguió la paz”, con el propósito de atraer la inversión del capital.

El paramilitarismo en Barrancabermeja.

El proyecto paramilitar en la región del Magdalena Medio ha sufrido modificaciones en su implementación; estas han obedecido a la multiplicidad de intereses políticos y económicos del Estado, actores civiles y militares y a la configuración y maduración de un proyecto político agenciado desde su estructura militar. Esto ha llevado a que en Barrancabermeja las fases o parte de las fases de su implementación se den manera simultánea.

El gobierno parecía ignorar la expansión del fenómeno paramilitar. La única novedad aportada por Samper fueron sus actos de contrición con los que intentaba conmover a la opinión pública y demostrar su buena fe a la comunidad internacional. En enero de 1995, por ejemplo, reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de casi 200 personas en Trujillo,

Valle, con varios oficiales involucrados en ella, comenzando por el mayor Alirio Ureña. Un informante del ejército, Daniel Arcila, había confesado:

A las víctimas les cubrieron la cabeza con costales y las arrojaron al suelo. Con una manguera, el mayor Ureña les puso un chorro de agua en la cara, a la altura de la boca y de la nariz mientras los interrogaba. Luego los amontonaron en la peladora. Alguien ordenó traer el soplete y la motosierra. Los retenidos fueron descuartizados con la motosierra, dejándolos desangrar. Las cabezas y los troncos de las víctimas fueron depositados en costales diferentes, y el 1º de abril 1990, una volqueta Ford azul llevó los cadáveres hasta el río Cauca.

Tras el reconocimiento público de culpabilidad por parte de Samper, fueron muertas o hechas desaparecer en Trujillo otras 130 personas, entre las que se hallaba el mismo Arcila, a quien los abogados de los militares investigados habían intentado desacreditar, afirmando que padecía trastornos psíquicos (Comisión Interamericana, 1995). “Prometieron el cielo y la tierra pero seguimos igual”, dijeron los sobrevivientes de Trujillo, a quienes no se hizo justicia ni se les resarcó, como se les tenía prometido. En otra ocasión, Samper pidió perdón en presencia de los familiares de las víctimas, del embajador norteamericano Curtis Kamman, de altos funcionarios de la ONU y representantes de diversas organizaciones humanitarias, en nombre del Estado, por los actos de “una violencia delirante” realizados por sus agentes. “¿Para qué disculpas si no hay castigo?”, le replicaron los padres de nueve muchachitos fusilados en un oratorio de Medellín en noviembre de 1992 por un grupo de policías, posteriormente absueltos por la justicia militar.¹³

Otras medidas lanzadas por el presidente resultaron claramente paradójicas. La apertura, en las guarniciones de las brigadas militares, de ventanillas públicas adonde podían dirigirse los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos para presentar sus denuncias, no hicieron sino hacer todavía más penoso su calvario y aumentar el riesgo de ser eliminados. Cuando comprobó que las organizaciones de los derechos humanos no se contentaban con sus escenificaciones, Samper se enfureció, declarando que “prefería ver, como presidente y comandante de las Fuerzas Armadas, a los militares combatiendo en las montañas, que respondiendo a acusaciones infundadas en los tribunales”. Al no poder acabar con el paramilitarismo, Samper decidió legalizarlo. En diciembre de 1994 promovió las Cooperativas Comunitarias de Vigilancia Rural (Con-

¹³. *El Colombiano*, 30 de julio de 1998.

vivir). Presentadas como “instrumentos de defensa civil”, financiadas por personas privadas, armadas y coordinadas por la policía y el ejército, las Convivir eran la copia de los grupos creados veinte años antes con la Ley 48. A pesar de la oleada de críticas formuladas por las organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto nacionales como internacionales, a las que se sumó el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, fueron constituidas más de 700 en tres años.¹³ Para formar una cooperativa era suficiente llenar un impreso con los datos de los representantes legales y de los socios, y presentar la documentación al batallón más cercano. El ex coronel Carlos Alfonso Velásquez criticó estos nuevos organismos. “Si el Estado no tiene capacidad suficiente para mantener controlados a sus propios militares y policías, mucho menos la va a tener para controlar a la gente que no es del Estado”. Los militares se mostraban, por el contrario, muy contentos. “Si queremos ganarle la guerra a la guerrilla, hay que armar a la gente porque nosotros nunca podremos patrullar bien un país tan grande como Colombia”.

En agosto de 1997, el ministro de Interior admitió que desconocía cuántas eran las cooperativas Convivir y qué número de hombres y armas tenían. El organismo que debería haberlas controlado en todo el territorio nacional, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, contaba con una plantilla de 30 personas, y un presupuesto que a veces nos les permitía siquiera salir de Bogotá. El Estado había creado un nuevo ente armado que se le había ido de las manos. Las Convivir,¹⁴ pronto llamadas por muchos Conmorir, se asentaron sobre todo en las zonas donde era más fuerte el paramilitarismo. Su creación fue solamente una de las concesiones hechas por Samper a la cúpula militar, que desde hacía años afirmaba que tenía las manos atadas en la guerra contra la subversión. Toda excusa era buena para justificar ciertas derrotas clamorosas, sufridas sobre todo a manos de las FARC, que eran ya capaces de enfrentarse abiertamente a compañías enteras de soldados profesionales. En etapas sucesivas fue proclamado el Estado de excepción, con el consiguiente establecimiento de “zonas especiales de orden público”, que suponían la restricción de los derechos civiles de la población local y la toma de plenos poderes por parte de los comandantes militares.

En las regiones de mayor conflicto se puso en marcha un mecanismo perverso: el ejército favorecía el crecimiento de grupos paramilitares, que realizaban terribles masacres, el Estado central respondía a las pro-

14. Sobre las Convivir, véase *Alternativa*, 15 de marzo de 1997, y *Cambio* 16, 18 de agosto de 1997.

testas y acusaciones enviando al lugar contingentes militares, y éstos, en vez de combatirlos, facilitaban todavía más sus actividades. En el noreste del país, sembrado de minas de oro y oleoductos, por ejemplo, aumentaron paralelamente tanto el número de brigadas móviles y de batallones de contraguerrilla como el de bandas paramilitares. Cuando, por una coincidencia, se descubría a un oficial colaborando con los paras, sus superiores se apresuraban a mostrarlo como un caso aislado que nada tenía que ver con la institución, para luego apoyarlo discretamente de mil formas, evitándole la cárcel o cualquier tipo de condena.

La prensa, más o menos conscientemente, tomó parte activa en la “guerra sucia”. En mayo de 1997, por citar un dato, los periódicos publicaron los nombres de 138 alcaldes acusados de colaborar con los guerrilleros, desviando a ellos parte de los fondos públicos. Gloria Cuartas dijo que “le pusieron una lápida encima”. Solamente después de desmentidos y de protestas, los periódicos atribuyeron la acusación a una fuente militar sin identificar. En todo caso, durante los meses sucesivos fueron asesinados una docena de alcaldes que figuraban en aquella lista, mientras otros dimitieron y abandonaron su zona.

La estrategia de los paras era considerada la única eficaz frente a la rebelión social. Así empezaron a afirmarlo, con menos pudor cada día, amplios sectores del poder económico. En 1994 Fidel Castaño admitió que “los grupos de autodefensa son financiados históricamente por quienes tienen intereses económicos”. En una entrevista concedida siete años después al periodista y filósofo francés Bernard Henry-Levy, su hermano Carlos afirmó “¿Atentados ciegos? ¿Nosotros? ¡Jamás! Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. ¡Le impiden trabajar a la gente! Por eso los matamos”.¹⁵

Según el padre Javier Giraldo, entonces director de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia,

el paramilitarismo ha ido pasando, en el curso de menos de dos décadas, de “Escuadrón de la Muerte”, al cual se podrían transferir con estrategias de imagen y de encubrimiento todos los crímenes de Estado, a ser asumido como una instancia justiciera, única que se va mostrando eficaz en el campo de una justicia vindicativa, y que va ganando vertiginosamente terreno en el campo de la legitimación social: sus líderes gozan de un amplio poder en los *mass media*, de tolerancia e impunidad absoluta, y

¹⁵. *Semana*, 10 de octubre 1994, y 10 de junio de 2001

sus cuarteles generales son fortalezas protegidas por todos los poderes del Estado. Son ya interlocutores políticos para el Estado y la clase empresarial (Comisión Intercongregacional, 1997).

En realidad los paras, por lo menos en las regiones del Atlántico, no eran ya solamente un instrumento de muerte, pues se habían convertido en la expresión de un proyecto político, económico y social autoritario, ligado a los barones locales de los dos partidos tradicionales, y protegido por los sectores económicos amenazados por la actividad guerrillera.

En 1990 el gobierno había reconocido la existencia de grupos paramilitares en cinco de los 32 departamentos del país. En noviembre de 1997, los paras actuaban ya en 25 departamentos. “Pueden ser 2000 o 3000 hombres armados pero, con la movilidad que tienen y las puertas que se les abren, es como si fueran 10.000”, afirmaba el sociólogo Alfredo Molano.¹⁶ En el mismo mes en que se había producido la enésima matanza realizada en La Horqueta, con 14 víctimas, el gobierno Samper creó un nuevo Bloque de Búsqueda de los grupos de “justicia privada”, formado por representantes de todos los aparatos represivos del Estado y que, después de haber prometido solemnemente luchar contra los paramilitares, desapareció en unas semanas. La burla de la lucha contra el paramilitarismo era conocida también por Washington. El Departamento de Estado norteamericano subrayó en su informe de 1996 que el gobierno Samper mostraba una “política de aquiescencia” frente a los paras. Aunque se trataba de juicios severos, no llegaron a ejercer presión alguna sobre el poder colombiano.

Seguros de nos ser combatidos por nadie, los paras de Castaño se unieron en diciembre de 1996 en la Coordinadora Nacional Contra-guerrillera con sus homólogos del Magdalena Medio y del Meta, bajo el mando del esmeraldero Víctor Carranza, y tomaron el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aspirando a convertirse en la guerrilla de la derecha, decidieron copiar a las FARC y al ELN. La primera proclama “desde las montañas de Colombia” parecía más un manual de espionaje y técnicas de contraguerrilla que un documento político-ideológico. En los documentos posteriores los paras afinaron su discurso. El único elemento que los diferenciaba de la guerrilla se encontraba en los principios básicos del movimiento, que hacían referencia “al abandono de los deberes de tutelar la vida, patrimonio y libertad de los ciudadanos”. Por lo demás, las AUC afirmaban que su lucha iba contra la corrupción estatal,

¹⁶. *Cambio 16*, primero de diciembre de 1997.

a favor de la democratización de la sociedad, y por la justicia social, hasta tal punto que los periódicos se preguntaban: “Entonces, ¿por qué pelean?”.¹⁷ Algún intelectual formuló hipótesis tan sugestivas como ingenuas. “Si son tan persistentes las convergencias, la guerrilla y las autodefensas podrían terminar aliadas contra los factores que para ellos impiden el cambio, como son los terratenientes, la clase política corrupta y todos los representantes del establecimiento”.

El discurso de las AUC era en realidad simple propaganda que nadie podía tomar en serio. Los paras se decían favorables a una intervención estatal fuerte en favor de una economía solidaria, teniendo como punto central una verdadera reforma agraria, afirmando que los realizados hasta entonces no habían sido sino “un simple y limitado programa de incentivo del sector agrícola”.¹⁸ Y, sin embargo, continuaban actuando cada día como guerreros despiadados de la contrarreforma que había entregado a los narcos 5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país. Dos millones de ellas habían ido al esmeraldero Víctor Carranza, y uno a la familia Ochoa. Las fincas superiores a 500 hectáreas, que en 1985 comprendían 9,6 millones de hectáreas, abarcaban casi 20 millones en 1996. Según *El Tiempo*, 500.000 de las 850.000 hectáreas de la región controlada por los paras de Córdoba acabaron durante aquellos años en manos de los mafiosos.¹⁹

El objetivo de las AUC era extenderse hacia las regiones controladas por la guerrilla: hacia el noreste, históricamente bajo la influencia del ELN, y hacia el sur, donde prevalecía la economía cocalera y se hallaban los mayores contingentes de las FARC. Era necesario, sin embargo, dar un golpe de efecto y quitarse de la espalda un pasado lleno de terror ensuciado por la droga y, por ello, poco presentable. En 1996 desapareció Fidel Castaño, junto con otros hombres, en la selva del Darien, en las fronteras con Panamá. Al dar la noticia, su hermano Carlos se presentó como el nuevo Rambo. Nadie vio el cadáver de Fidel. Muchos dudaron de su muerte. Los mitos, incluso los peores, están destinados a durar mucho tiempo.

17. *Semana*, 11 de mayo de 1998.

18. Planteamiento sobre la solución política negociada al conflicto armado interno, documento AUC del 9 mayo de 1998.

19. *El Tiempo*, 9 de mayo de 1997.